

C.A. Copiapó

Copiapó, veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

**Vistos y considerando:**

1º) Comparece doña Karina Ibarra Figueroa, abogada, por el sentenciado don **Javier Alexandre Pérez Muñoz**, en causa RIT 1069-2023, RUC 2301105980-5, del Juzgado de Garantía de Tocopilla, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, interpone acción constitucional de amparo en contra de la segunda sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, integrada por la ministra doña Virginia Soublette Miranda, el ministro don Juan Opazo Lagos y la fiscal judicial doña María Teresa Quiroz Alvarado, en atención a la resolución pronunciada con fecha seis de junio del presente año, bajo el rol N° 930-2024 (PENAL), que confirmó la resolución de veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro del aludido juzgado de garantía, que revocó la pena sustitutiva de remisión condicional de acuerdo con el artículo 27 de la Ley N° 18.216.

Al respecto, expresa que el amparado fue condenado el 19 de febrero de 2024, en procedimiento abreviado, por el Juzgado de Garantía de Tocopilla, en causa RIT 1069-2023, RUC 2301105980-5, a sufrir la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, sustituyéndose aquella por su remisión condicional.

Añade que, con fecha 10 de mayo de 2024, el amparado fue condenado en causa RIT 273-2024, RUC 2400227512-7, del mismo tribunal, a sufrir una pena de dos unidades tributarias mensuales, por el delito de porte de arma cortante o punzante, previsto en el artículo 288 del Código Penal.

Explica que, en la primera de las causas indicadas se fijó audiencia de revocación de la pena sustitutiva para el 21 de mayo de 2024, en la que se estableció el quebrantamiento de la pena sustitutiva conforme al artículo 27 de la ley 18.216, ordenándose el cumplimiento de un saldo de 231 días, de manera efectiva, el que se inició el domingo 16 de junio del presente año.

Seguidamente, señala que, en contra de la aludida resolución de 21 de mayo pasado, se apeló para ante la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, la que en fecha 6 de junio de 2024, en causa rol 930-2024, la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXNVXXPLHX

confirmó, argumentando, en síntesis, que el artículo 27 de la Ley N° 18.216 atribuye el quebrantamiento a la comisión de un crimen o simple delito, y no a la sanción por penas de crimen o simple delito, por lo que el asunto debía sujetarse a la pena en abstracto y no a aplicada en concreto por el respectivo tribunal.

Precisado lo anterior, expresa quien se dirige a esta Corte, que, si bien el amparado fue condenado posteriormente, se le impuso una pena de falta, la que no tiene la entidad para dar por cumplidos los presupuestos del artículo 27 de la Ley N° 18.216, en abono de lo cual cita las sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema en causa Rol 243.782-2023 y Rol 66107-2021.

A continuación, se refiere a la procedencia de la acción de amparo constitucional en el caso de autos, para lo cual invoca los artículos 6, 19 N° 7 y 21 de la Carta Fundamental, y las sentencias del Máximo Tribunal que indica.

Termina solicitando acoger la acción, restableciendo el imperio del derecho, dejando sin efecto la revocación de la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena otorgada en causa RIT 1069-2023, del Juzgado de Garantía de Tocopilla, por no reunirse los presupuestos para ello y oficiando por el medio más expedito a Gendarmería, para su inmediata liberación.

**2°)** A folio 6 rola informe evacuado por la segunda sala de la ltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, integrada por la ministra titular doña Virginia Soublette Miranda, el ministro titular don Juan Opazo Lagos y la fiscal judicial titular doña María Teresa Quiroz Alvarado.

Al respecto, reproducen los antecedentes correspondientes a la resolución apelada en su oportunidad, dictada en causa RIT 1069-2023, RUC 2301105980-5, del Juzgado de Garantía de Tocopilla, que declaró el quebrantamiento de la pena sustitutiva de remisión condicional otorgada en la misma causa.

Añaden que la apelación de la defensa se fundó en que la nueva sanción debía considerarse una falta por sólo aplicarse multa de dos unidades tributarias, invocando jurisprudencia relativa a la prescripción de la pena, y alegando que a la fecha del segundo delito aún no comenzaba el cumplimiento de la pena sustitutiva, y, siendo oídas las partes, se dictó la



resolución cuyo contenido reproduce, y que confirmó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de Tocopilla.

Sostienen que, atendido todo lo anterior, la resolución de esa Corte de Apelaciones se encuentra suficientemente fundada, siendo claro que se hizo cargo de los cuestionamientos, fundando los argumentos conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, con el estándar exigido para este tipo de resoluciones, insistiendo que la jurisprudencia que dice relación con la prescripción de la pena no es aplicable en la especie en tanto la redacción normativa de esta institución lleva a analizar la prueba en concreto, lo que no altera que en general los hechos se califican en crímenes, simples delito y faltas según la pena en abstracto.

Así, refieren que, conforme lo entendió la sentencia que impuso la segunda condena que califica el hecho como delito y no como falta penal, siendo relevante que los artículos 21 y 60 del Código penal disponen que la pena de multa es común a los crímenes, simples delitos y faltas, lo que impide calificar el hecho ilícito de falta por el sólo hecho de aplicarse pena de multa, siendo relevante que existen simples delito que tiene como pena alternativa la de multa como los daños y los delitos de las personas jurídicas, lo que no altera su naturaleza.

Explican, en relación con las demás alegaciones, que ese Tribunal de Alzada estima que los efectos del artículo 27 se producen desde que la obligación de cumplir surge, esto es desde que esta ejecutoriada la sentencia, y no desde que se empieza a cumplir, situación que muchas veces se retarda por voluntad propia del imputado o por la actitud contumaz.

En cuanto a los demás argumentos del recurso de amparo, hacen presente que el efecto del artículo 27 en cuestión es la revocación de pleno derecho, sin que sea posible sólo intensificar la pena conforme lo permite el artículo 25 de la misma ley, norma que se aplica en caso de incumplimiento, siendo relevante que el artículo 26 distingue expresamente entre los incumplimientos del artículo 25 y el quebrantamiento y revocación del artículo siguiente, el 27, lo que deja patente que el único efecto posible al concurrir los presupuestos de esta última norma, es la decretada.

Concluyen manifestando que, atendida la naturaleza y el contenido de la resolución recurrida de amparo, y haciéndose cargo de los puntos



debatidos en la forma referida, se dio cumplimiento a las exigencias legales de fundamentación para resolver en la forma que se hizo.

3º) El recurso de amparo, establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, constituye un procedimiento de emergencia, cautelar, que protege una de las garantías constitucionales más importantes del Estado de Derecho y, por lo mismo, se requiere de una resolución rápida y eficaz, por cuyo motivo el procedimiento es sin forma de juicio, inquisitivo y tiene sólo por objeto indagar si la restricción de la libertad de que se trata ha sido ilegal o arbitraria.

4º) La citada acción es procedente en aquellos casos en que la libertad personal de una persona se vea amagada con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, con el fin preciso de que se ordene guardar las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Acorde a lo expuesto, la procedencia de esta acción en contra de una resolución judicial resulta, ante todo, excepcional.

5º) Sin embargo, se observa que la cuestión planteada en el recurso de amparo ya ha sido resuelta en ambas instancias y en esas oportunidades, fueron entregadas las razones que fundamentaron la decisión, pretendiéndose por esta vía una nueva revisión de los hechos y el derecho, como se advierte de los argumentos y su petitorio, lo que resulta ajeno a los supuestos y fines de la acción otorgada por el artículo 21 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 7 y 21 de la Constitución Política de la República, **SE RECHAZA** el recurso de amparo deducido en favor de don **Javier Alexandre Pérez Muñoz**.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Amparo N° 89-2024.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXNVXXPLHX



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXXNVXXXPLHX

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Copiapó integrada por Ministra Presidente Aida Osses H., Ministra Suplente Claudia Jimena Cárdenas N. y Abogada Integrante Maria Karina Guggiana V. Copiapo, veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

En Copiapo, a veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXVNXXXPLHX